



IDHUS
Instituto para el Desarrollo
de Sociedades Humanas



Burkina Faso

**Armando a la población
civil a costa de la cohesión**

Autor: Crisis Group

Título original: *Burkina Faso: Arming Civilians at the Cost of Social Cohesion?*

Traducción: Instituto IDHUS



Presentación

Los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) son un instrumento clave de la estrategia de contrainsurgencia de las autoridades de Burkina Faso.



El presidente Ibrahim Traoré ha recurrido a estos civiles armados en una especie de movilización patriótica contra los yihadistas, compensando así las limitaciones de efectivos y de alcance geográfico de las fuerzas armadas. Pero los VDP, que a menudo son colocados en primera línea con escaso entrenamiento, sufren bajas significativas. Algunos, con sus acciones, incluso alimentan la inseguridad y socavan la cohesión social. Los observadores les acusan de atacar a civiles, sobre todo fulani, y salir impunes. Además, su presencia en las ciudades y pueblos expone a los civiles a las represalias yihadistas. Para contener estos riesgos, las autoridades burkinesas deberían frenar el reclutamiento de los VDP y utilizar mejor las fuerzas armadas regulares. También deberían reforzar los mecanismos de control, con el fin de castigar cualquier delito probado, y mejorar sus relaciones con las comunidades excluidas del reclutamiento.

En enero de 2020, el presidente Roch Marc Christian Kaboré creó los VDP para luchar contra los grupos yihadistas, situándolos bajo la autoridad del ministerio de Defensa. Antes de esta decisión, grupos de civiles armados conocidos como Koglweogo ("guardianes del monte" en mooré, la principal lengua del país) ya combatían a los bandidos en muchas regiones. Los primeros grupos de autodefensa aparecieron en 2013 como resultado de

iniciativas locales de base, coincidiendo con el final del régimen del presidente Blaise Compaoré, un periodo marcado por el aumento de la inseguridad. A partir de 2017, los koghlweogo se enfrentaron a los yihadistas surgidos en Burkina Faso. Abrumado por la fuerza de los yihadistas, Kaboré convirtió a los Koghlweogo en un cuerpo auxiliar. Sin embargo, estas unidades tuvieron varias deficiencias, ya que nunca recibieron el apoyo prometido por las autoridades. Muchas de ellas se disolvieron en 2021 y 2022. El régimen del teniente coronel Paul-Henri Damiba, que llegó al poder con un golpe de Estado en enero de 2022, no cambió fundamentalmente esta situación.

Cuando, a su vez, el presidente Traoré subió al poder en septiembre de 2022 tras un segundo golpe, anunció el reclutamiento de 50.000 VDP adicionales para recuperar el control del territorio nacional. Esta iniciativa, financiada en parte por un nuevo Fondo de Apoyo Patriótico abierto a las contribuciones del público, ha sido muy popular hasta ahora. Aunque los VDP se están desplegando por todo el país, siguen concentrados en las zonas urbanas. Su expansión gradual a las zonas rurales se enfrenta a importantes obstáculos, ya que los yihadistas son más fuertes en el campo. Los VDP, que constituyen un importante activo militar, siguen sufriendo numerosas bajas y a menudo critican al ejército por su inadecuado apoyo. Por ahora, su creciente descontento se dirige más a las fuerzas armadas que a Traoré, que sigue contando con un amplio apoyo entre sus filas.

Aunque estas decenas de miles de tropas interpuestas se han movilizado para hacer frente a la inseguridad, sus acciones contribuyen paradójicamente a la escalada de la violencia a través de los presuntos crímenes que algunos de ellos cometen contra civiles, desencadenando ciclos de represalias entre las facciones armadas. El reclutamiento de VDP se ha producido en gran medida en detrimento de las comunidades fulani, de las que las autoridades y los auxiliares sospechan a menudo que están en connivencia con los yihadistas. En medio de esta desconfianza, algunos VDP abusan de su autoridad para saldar cuentas locales, a menudo centradas en cuestiones de tierras. A medida que los VDP se despliegan más por todo el país, la violencia contra la población civil también se extiende, afectando a comunidades que antes eran seguras. Se han investigado varios

abusos y se han emprendido acciones legales contra algunos VDP. Sin embargo, estas medidas siguen siendo limitadas, sobre todo en lo que respecta a la presunta violencia masiva. Al mismo tiempo, los yihadistas están atacando las aldeas donde se reclutó a los VDP, causando muchas víctimas civiles.

Muchos de los socios occidentales de Burkina Faso han suspendido su cooperación con Uagadugú desde el segundo golpe de Estado o, al menos, se muestran reacios a poner en marcha nuevos proyectos. Se encuentran en una situación compleja. Por un lado, están perplejos ante la decisión del régimen de apoyarse tanto en los VDP. Algunos socios se niegan por principio a apoyar el armamento de civiles, mientras que otros se muestran reticentes ante los problemas prácticos que plantea el reclutamiento de esos voluntarios. En consecuencia, no pueden satisfacer la demanda del nuevo régimen de armar a decenas de miles de VDP. Por otro lado, estos mismos socios llevan varios años dando prioridad a la inversión en iniciativas de seguridad. Dudan en detener bruscamente sus esfuerzos en este ámbito y arriesgarse a sacrificar los beneficios de esta inversión. También temen que, si no se satisfacen las demandas de financiación en materia de seguridad de las nuevas autoridades, éstas recurran a Rusia, como ocurrió en Malí. Precisamente ese escenario se ha ido perfilando poco a poco desde la Cumbre Rusia-África de julio.

En 2020, Crisis Group expresó su preocupación de que la introducción de los VDP resultara un arma de doble filo, temores que ahora se confirman. Sin embargo, ahora que las autoridades han situado los VDP en el centro de su plan de seguridad, no pueden dar marcha atrás instantáneamente sin correr el riesgo de socavar la seguridad. Además, los VDP son una importante base de apoyo para el presidente Traoré.

Sin abandonar esta estrategia, las autoridades pueden tomar medidas para mitigar sus efectos negativos. Deberían frenar el reclutamiento de VDP y seguir integrando a los ya alistados en el ejército bajo ciertas condiciones, reforzando al mismo tiempo los mecanismos de control de estas tropas interpuestas en el propio ejército, frecuentemente acusado de violencia contra los civiles. Las autoridades también deberían crear mecanismos de control comunitarios previstos en la legislación para

frenar el riesgo de abusos que puedan cometer los VDP. Por último, deberían tratar de limitar las repercusiones de esta violencia en la cohesión social local y fomentar el diálogo con las comunidades que hasta ahora han sido excluidas de facto de los VDP.

Por su parte, los socios del país, principalmente occidentales, no pueden contribuir a armar o incluso a formar a los VDP. Sin embargo, pueden ofrecer su apoyo para introducir mecanismos que permitan controlar mejor las acciones de los VDP y reducir los posibles abusos. En términos más generales, deberían quitar prioridad a las inversiones en seguridad cuando dichos proyectos sean ahora difíciles de conciliar con el enfoque adoptado por las nuevas autoridades. En particular, la Unión Europea debería seguir intentando convencer a los dirigentes burkineses de que su apoyo en otros ámbitos como la cohesión social y la ayuda humanitaria es esencial, y debería reorientar sus propios esfuerzos en esta dirección de forma prioritaria. Estados Unidos, que sigue teniendo influencia en el país, podría encabezar una coalición informal de socios para entablar un diálogo con las autoridades y animarlas a que los VDP se conviertan en una solución en lugar de seguir siendo parte del problema.

Introducción



Desde finales de 2015, Burkina Faso ha sido testigo de un aumento constante de los atentados perpetrados por dos grupos yihadistas, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y la Provincia del Sahel del Estado Islámico (IS Sahel).

Confinada inicialmente a las provincias de Soum (donde apareció por primera vez el JNIM) y Oudalan (donde surgió IS Sahel), ambas en la frontera norte con Mali, la violencia se ha extendido ahora a casi todo el país. El JNIM está activo o presente en once de las trece regiones del país. Solo la región de Plateau-Central se ha librado, ya que entre 2016 y 2018 se produjeron tres atentados en la capital, Uagadugú (región Centro). El IS Sahel, por su parte, opera en toda la región del Sahel, especialmente en Oudalan.

Estas insurgencias han dejado miles de muertos y han desplazado a unos dos millones de burkineses dentro del país. También provocaron dos golpes de Estado en 2022. El 24 de enero de ese año, tras un ataque especialmente mortífero contra gendarmes en Inata a finales de 2021, un grupo de oficiales dirigidos por el coronel Paul-Henri Sandoago Damiba

derrocó al presidente Roch Marc Christian Kaboré. Kaboré había sido elegido presidente en 2015 y reelegido en 2020. El propio Damiba fue derrocado el 30 de septiembre de 2022 por el capitán Ibrahim Traoré, tras un ataque a un convoy militar en el que murieron 37 soldados y decenas de civiles.

Al igual que Kaboré y Damiba, el presidente Traoré se ha esforzado por recuperar las partes del país que han caído en manos de los yihadistas. En pos de este objetivo, ha ido más lejos que sus predecesores en el reclutamiento, armamento y despliegue de Voluntarios para la Defensa de la Patria (Volontaires pour la défense de la patrie, o VDP). Creados por Kaboré en 2020, los VDP son civiles reclutados por las fuerzas armadas para formar un "cuerpo auxiliar". Traoré consideró que "aumentar el número de tropas era esencial" y vio en el reclutamiento masivo de civiles para apoyar al ejército la mejor solución. Además de los VDP, Burkina Faso cuenta con otros grupos de autodefensa como los Dozo (una hermandad de unos 5.000 cazadores tradicionales en el oeste) y los Koglweogo.

Los VDP son ahora el núcleo de la estrategia de seguridad de Burkina Faso y han ayudado a las fuerzas regulares a lograr varias victorias sobre grupos armados. Sin embargo, aún no han restablecido la paz, e incluso han generado nuevos tipos de inestabilidad en muchas regiones. Aunque su gran número, dedicación y conocimientos locales han beneficiado a las fuerzas armadas, también han avivado las tensiones entre comunidades y expuesto a los civiles a las represalias yihadistas. Los VDP -decenas de miles de civiles armados con armas de uso militar- son un arma de doble filo, pero las autoridades no pueden ni quieren revertir su movilización. Este informe ofrece recomendaciones para contrarrestar su impacto negativo.

El análisis se basa en el trabajo de campo realizado en agosto de 2022 y marzo de 2023 en Uagadugú y otras regiones afectadas por la insurgencia. Entre las decenas de entrevistados figuran residentes de estas regiones, funcionarios estatales, oficiales militares y agentes de la sociedad civil. Entre febrero y noviembre de 2023 se realizaron a distancia varias entrevistas adicionales con actores burkineses e internacionales.

VDP: Civiles armados en primera línea en la lucha contra la insurgencia



La primera oleada de VDP (2020-2022): Un comienzo débil

El 21 de enero de 2020, tras un año de intensa violencia yihadista, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un proyecto de ley del Gobierno para crear los VDP como un "cuerpo auxiliar" que sería entrenado, equipado y puesto bajo la autoridad del Ministerio de Defensa. La Asamblea ratificaba una decisión que el presidente Kaboré había tomado dos meses antes, después de que 38 civiles murieran en una emboscada del JNIM en la región del Este. Ese ataque yihadista causó conmoción en todo el país; fue el asalto más mortífero desde que comenzó la insurgencia armada a finales de 2015. Kaboré respondió llamando a "la movilización general de los hijos e hijas de la nación para luchar contra el terrorismo".

Las autoridades también crearon los VDP en un esfuerzo por gestionar los grupos de autodefensa que existían desde 2013, antes del primer ataque yihadista. En muchas regiones del país, los pueblos habían formado el grupo Koglweogo para frenar la creciente inseguridad que se había apoderado del país a medida que el régimen de Blaise Compaoré se debilitaba y finalmente caía en octubre de 2014. El Koglweogo ayudó a

mejorar la seguridad en las zonas rurales y redujo significativamente el bandidaje. Desde 2017, cuando los grupos yihadistas extendieron su alcance desde la región del Sahel hasta el norte y centro-norte del país, desbordando a las fuerzas armadas burkinesas, el Koglweogo se unió a la lucha para conjurar esta nueva amenaza.

El Koglweogo comenzó como una iniciativa de seguridad local muy descentralizada, pero acabó ganando el apoyo de las autoridades centrales. En 2019, varios miembros del partido gobernante del presidente Kaboré, el Movimiento Popular para el Progreso, comenzaron a suministrar armas a los Koglweogo desde las provincias de Loroum y Boulsa, probablemente con el apoyo de las autoridades tradicionales de la Meseta Central. Estos líderes consideraron que armar a los civiles era una forma de combatir la expansión yihadista en Burkina. Inspirados por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) creados por el capitán Thomas Sankara, presidente del país entre 1983 y 1987, esperaban que los Koglweogo obtuvieran legitimidad de su asociación con esta figura tan respetada. Sin embargo, la comparación con los CDR es engañosa, ya que estos comités nunca tuvieron que enfrentarse a enemigos con armas de grado militar. Otra diferencia es que los Koglweogo nunca han tenido una ideología definida, a diferencia de los CDR.

Los VDP pronto tuvieron dificultades operativas, principalmente debido a la falta de recursos materiales, un problema que persiste en la actualidad (véase la Sección II.D, más adelante). En términos más generales, la primera oleada operó a menudo fuera de sus competencias, ya que los VDP, asignados para proteger los intereses de su "aldea o área local", en la práctica pasaron a cubrir ámbitos más amplios, a veces provincias enteras. Por ejemplo, Ladjí Yoro, líder de un grupo de VDP en el norte de Burkina, operaba en toda la provincia de Loroum. Otro problema era identificar a los VDP -que a veces ni siquiera estaban registrados oficialmente- cuando se mezclaban con civiles sin formación.

Y lo que es más importante, los VDP se encontraron rápidamente en primera línea de las batallas contra la insurgencia, a pesar de que sus actividades se limitaban legalmente a la autodefensa. El ejército, conmocionado por una serie de graves pérdidas, tendía a quedarse en sus

cuarteles, dejando que los VDP lucharan solos contra los yihadistas. Para empeorar las cosas, pocos meses después de la creación de los VDP, el Estado firmó un acuerdo (conocido como "acuerdo de Djibo") con el JNIM para poner fin a los combates entre las fuerzas armadas y este grupo yihadista entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Este pacto excluía a los VDP, que se convirtieron entonces en el principal objetivo de los combatientes del JNIM.

Una serie de derrotas y bajas debilitaron a los VDP, especialmente vulnerables en sus bastiones de Sollé (Loroum), Gorgadji (Seno), Arbinda y Kelbo (Soum), Bourzanga (Bam) y Tanwalbougou (Gourma). Los VDP, al sentirse abandonados, llegaron a resentirse amargamente contra el Estado y las fuerzas armadas.²¹ Muchos de ellos publicaron insultos en las redes sociales.

Entre 2021 y 2022, esta situación obligó a muchos VDP a deponer las armas y, a menudo, a abandonar sus zonas de origen. Estas deserciones fueron en su mayoría decisiones individuales y no colectivas. En la región Centro-Norte, por ejemplo, decenas de VDP depusieron las armas en Nagbingou (Namentenga) y Bourzanga (Bam), huyendo a Uagadugú o a Costa de Marfil. En 2021, la presión yihadista en la región Norte obligó a los VDP, en una posición fuerte un año antes, a replegarse hasta el punto de retirarse por completo de los combates hasta que el capitán Traoré llegó al poder. Esta presión llevó a algunos VDP, y a las comunidades locales en general, a negociar los términos de su retirada con el JNIM. Esta retirada transcurrió en general sin problemas, aunque a veces los VDP perdieron o entregaron sus armas.

El efímero régimen del presidente Damiba, el Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración (MPSR), se mostró ambivalente respecto a los VDP. El régimen se apresuró a expresar su desconfianza hacia estos grupos y a acusarlos de abusos. Sin embargo, la delicada situación de seguridad le obligó a intentar gestionar mejor a estos grupos en lugar de tomar medidas para deshacerse de ellos. Para ello, Damiba creó en junio de 2022 la Brigada de Vigilancia y Defensa de la Patria, adscrita al Mando Nacional de Operaciones Teatrales, creado en febrero de ese mismo año para coordinar todas las operaciones antiterroristas en el país. Al mismo

tiempo que intentaba tenerlos bajo control, el Gobierno trató de ampliar la presencia de los VDP. En agosto de 2022, anunciaron su plan de crear VDP en todos los distritos de Burkina.

Sin embargo, ni el largo proceso de mejora de la gestión ni la campaña de reclutamiento llegaron a buen puerto, y este último proyecto tropezó con dificultades cuando algunas comunidades se negaron a crear VDP. Toda esperanza de llevar a cabo estos planes se desvaneció cuando el presidente Damiba fue derrocado pocos meses después de estos anuncios.

La segunda oleada de los VDP: Actores de una "nación armada"



Poco después de llegar al poder el 30 de septiembre de 2022 como líder del segundo Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración, o MPSR 2, el presidente Traoré hizo de la "liberación del país" su principal prioridad. En mucha mayor medida que sus predecesores, situó a los VDP en el centro de su estrategia antiyahadista.

Traoré considera que los VDP son cruciales en operaciones de contrainsurgencia en las que el control del terreno es vital y no basta con movilizar al ejército. Los VDP han repelido repetidamente ataques

yihadistas e incluso han tendido emboscadas a combatientes yihadistas como en Arbinda (Soum), Gorgadji (Seno), Piéla (Gnagna) y, en junio de 2023, Falagountou (Seno).

Para Traoré, el recurso a los VDP compensa los fracasos de los soldados y la falta de compromiso de algunas unidades del ejército, desgarradas por luchas intestinas exacerbadas por los golpes de Estado de 2022. Así, al haber perdido el estatus privilegiado del que gozaba bajo Kaboré, la gendarmería es ahora menos activa en la lucha antiterrorista.³² Traoré, que intenta recuperar el control de la gendarmería tras detener o sustituir a varias unidades nombradas por el régimen anterior, ha empezado a apoyarse más en la policía. Desde su llegada al poder, ha movilizó a la policía en la lucha antiterrorista desplegando dos unidades de élite conocidas como los *Groupements des unités mobiles d'intervention*, o GUMI.

El jefe del Estado y su círculo más cercano se enfrentan a tensiones en el seno de las fuerzas armadas que podrían amenazar la estabilidad de la administración. Los VDP podrían ayudar a consolidar el régimen si se encuentra bajo presión: su presencia en todo el país significa que pueden proporcionar inteligencia y acudir en ayuda del gobierno. Aunque los VDP aún no han sido utilizados en este sentido, el régimen ya ha movilizó a sus partidarios en Uagadugú tras los rumores de un golpe de Estado contra Traoré en septiembre de 2023.

Por ello, el 24 de octubre de 2022, el gobierno del MPSR 2 anunció el reclutamiento de 50.000 VDP, el doble del número de soldados del ejército. La población de Burkina Faso acogió con gran satisfacción esta campaña de reclutamiento masivo, ya que un sector cada vez mayor de la población quiere ayudar a hacer frente a la inseguridad rampante del país. El gobierno informó de que había recibido 90.000 solicitudes hasta noviembre.

Animado por esta entusiasta respuesta, el siguiente mes de mayo el primer ministro Apollinaire Joachim Kyélèm elevó el objetivo de reclutamiento a más de 100.000 VDP. Es difícil obtener cifras exactas, pero es probable que entre 30.000 y 60.000 VDP hubieran sido reclutados y movilizó a finales de septiembre de 2023, según las autoridades. La gran

mayoría de estos VDP son hombres, aunque también se han reclutado y desplegado mujeres en el frente.

El reclutamiento ha sido un proceso gradual. Los candidatos tienen que presentar su solicitud individualmente, lo que lleva tiempo; y las autoridades quieren evitar desbordar la capacidad del país para formar e integrar a los voluntarios. Armar a miles de civiles recién reclutados exige muchos recursos. En marzo de 2023, un alto funcionario describió el proceso como "adaptado a las limitaciones logísticas de las autoridades".

Los 50.000 nuevos VDP se dividen en dos nuevas categorías: VDP nacionales y locales (con el objetivo de reclutar a 15.000 y 35.000 miembros, respectivamente, según cifras oficiales). Los primeros tienen la misión de luchar junto a las fuerzas armadas en todo el país, mientras que los segundos son responsables de la seguridad en su "comuna", lo que les confiere un mandato más amplio que la primera oleada de VDP, que sólo operaban a nivel de aldea. Los VDP nacionales dependen del ministro de Defensa y reciben formación en tres campamentos del ejército. Los VDP locales, bajo la autoridad del Ministerio de Administración Territorial, Descentralización y Seguridad, reciben formación en la comisaría de policía o en el cuartel de gendarmería más cercano a su comunidad de origen.

Oficialmente, los VDP nacionales "son prácticamente soldados", según un funcionario burkinabé entrevistado por Crisis Group. Integrados en unidades del ejército, reciben el mismo equipamiento que las tropas y siguen las órdenes del ejército mientras llevan a cabo ataques conjuntos como parte de "batallones mixtos". Con el tiempo, se espera que muchos VDP nacionales se unan al ejército, como ocurrió durante una reciente campaña de reclutamiento de 5.000 soldados que pretendía alistar a "jóvenes VDP [nacionales]", según declaraciones del Ministerio de Defensa del 23 de febrero de 2023.

Los VDP locales reciben misiones defensivas para mejorar la seguridad en sus comunidades de origen. Su tarea principal es llevar a cabo patrullas para impedir que los yihadistas se expandan o regresen a las localidades rurales recuperadas. Además, se supone que deben proteger infraestructuras críticas (como puentes, escuelas, antenas eléctricas,

plantas de agua y electricidad), aunque en la práctica sólo desempeñan esta función en algunas zonas.

El objetivo es desplegar 100 VDP en cada uno de los 351 distritos del país. Los VDP operan ya por primera vez en varios distritos, especialmente en zonas que han vuelto a ser vulnerables a la violencia yihadista: las provincias de las regiones de Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades y Suroeste. Una evolución similar se ha producido en las regiones Centro-Oeste y Centro-Este, donde los habitantes han resistido ampliamente el despliegue de los grupos Koglweogo.

El reclutamiento masivo de VDP en regiones donde antes escaseaban, además de ser bien acogido por la población, se ha producido por tres razones principales. En primer lugar, la población local de estas zonas siente cada vez más la necesidad de resistir a la creciente amenaza yihadista, y los nuevos desplazados y las víctimas de estos grupos yihadistas o sus familiares (hombres y mujeres) expresan su disposición a unirse a los VDP. En segundo lugar, los habitantes de la capital (que representan la mayoría de los nuevos reclutas) son conscientes de que el yihadismo ya no se limita a zonas remotas del país, sino que se acerca peligrosamente a Uagadugú. Por último, los grupos dozo y algunos koglweogo, que se negaron a unirse a los VDP durante la primera oleada de reclutamiento, temen ahora ser apartados por los reclutas de los VDP, especialmente si estos voluntarios pertenecen a comunidades rivales.

Según las autoridades, los VDP nacionales y locales representan una oleada de patriotismo que la nación debería financiar. Con este fin, las autoridades anunciaron el 9 de diciembre de 2022 la creación de un Fondo de Apoyo Patriótico para el esfuerzo de guerra. Pretendían recaudar 152 millones de euros en 2023 para financiar la lucha antiterrorista, en particular mediante el reclutamiento y el equipamiento de los VDP. Este fondo, gestionado por el Ministerio de Economía, se nutre de las donaciones de ciudadanos y empresas burkineses, así como de diversos impuestos: una deducción voluntaria del 1% de los salarios netos de los empleados de los sectores público y privado, y gravámenes sobre determinados bienes y servicios de consumo (principalmente alcohol, tabaco y teléfonos móviles).

El apoyo popular a esta campaña de recaudación también es fuerte. A 30 de agosto de 2023, el Fondo de Apoyo Patriótico ya había recaudado 51,7 millones de euros, un tercio de la cantidad prevista. No obstante, esta cantidad parece insuficiente para mantener una fuerza tan grande a largo plazo. El ministro de Economía calcula que la nómina trimestral de los VDP costará 20 millones de euros, sin especificar en cuántos voluntarios se basa este cálculo: el número actual de miembros o el objetivo inicial de 50.000. Si se refiere a esto último, la suma recaudada sólo cubriría siete meses y medio de actividades de los VDP.⁵⁵

El presidente Traoré ha suscitado nuevas esperanzas entre los VDP y el público en general. Las filas de los VDP han aumentado desde su llegada al poder, pero la repetición de los mismos problemas a los que se enfrentó la primera oleada de VDP sigue siendo un riesgo muy real.

Desafíos en el despliegue de las fuerzas de seguridad

La distinción hecha entre los VDP nacionales y locales parece responder a las necesidades operativas de Burkina Faso de encontrar un equilibrio entre los despliegues ofensivos junto a las fuerzas armadas, por un lado, y la defensa del territorio, por otro. Todavía es demasiado pronto para conocer el impacto de esta estrategia, pero las siguientes observaciones son posibles tras casi un año de operaciones.

La línea divisoria entre los VDP nacionales y locales sigue siendo teórica en el sentido de que a menudo unen sus fuerzas para luchar contra los grupos yihadistas. Allí donde la presión yihadista es más débil, como en las regiones de las Cascadas o del Suroeste, los VDP pueden lanzar ataques contra los insurgentes en zonas rurales remotas, ya sea de forma independiente o junto con el ejército. También pueden hacerlo en el Centro-Este, que está sometido a más presión. En el resto del mundo, donde la amenaza yihadista es aún mayor, los VDP nacionales y locales trabajan junto al ejército en las grandes ciudades provinciales y sus alrededores. Los despliegues de los VDP nacionales y locales suelen limitarse a estas zonas.

Las misiones más lejanas suelen consistir en convoyes conjuntos del ejército y las VDP que recorren las carreteras principales, normalmente para proteger convoyes de suministros o escoltar a comerciantes.



La mayoría de los VDP se concentran en las principales ciudades de Burkina, donde los yihadistas no intentan atacar, como Ouahigouya, Dédougou, Tenkodogo, Kaya y Fada N'Gourma. Los nuevos reclutas se unen a los VDP desde la primera oleada de reclutamiento en estas localidades, junto con los VDP de distritos o pueblos vulnerables a los ataques yihadistas que se congregan en ciudades más seguras. En junio de 2023, había cerca de 1.700 VDP nacionales y locales en Fada N'Gourma (Gourma) y más de 700 en Ouahigouya (Yatenga).

Las autoridades han desplegado a menudo estos VDP junto a las fuerzas armadas en zonas remotas para liberar territorio. El objetivo suele ser reubicar y luego proporcionar seguridad a las poblaciones desplazadas.

Se han logrado algunos avances, pero es necesario consolidarlos a medio y largo plazo, ya que la situación en las aldeas recuperadas sigue siendo inestable. En la región Norte, las poblaciones de una veintena de pueblos de los distritos de Gourcy, Oula y Zogoré pudieron regresar a sus hogares en el verano de 2023 y permanecer allí. También se están reabriendo las escuelas en algunos de los pueblos recuperados, aunque esta tímida reactivación de los servicios públicos parece ser más una imposición del gobierno que algo que deseen los trabajadores del sector público, que temen que la situación vuelva a deteriorarse.

En otras regiones, la población que ha regresado se ha visto desplazada de nuevo. En el este, una unidad especial de policía de la GUMI, apoyada por los VDP, fue reasignada a Yamba, lo que permitió a la población regresar a sus hogares. En octubre, sin embargo, un importante ataque contra la coalición GUMI-VDP obligó a algunos de ellos a marcharse una vez más.

La lentitud de los avances se debe en parte a la complejidad de estos red despliegues, marcados por una combinación de tenues reconquistas de territorio y derrotas a manos de grupos yihadistas resistentes. En unidades pequeñas, a menudo inferiores al objetivo de 100 por distrito, los VDP pueden encontrarse aislados en sus zonas locales e impotentes para defenderse de los yihadistas. Los yihadistas suelen retirarse durante las misiones de reasentamiento organizadas por los VDP y las fuerzas armadas, prefiriendo evitar la confrontación en esa fase. Pero a menudo regresan después de que las fuerzas armadas se hayan marchado, señalando a los VDP y a otros que se quedan. Por lo tanto, garantizar la seguridad de estos reasentamientos requiere un esfuerzo sostenido.

Los retos cotidianos de los desplazados internos: Falta de recursos, quejas y desconfianza



A pesar de la voluntad del presidente Traoré de mejorar el trato que reciben los desplazados internos, su gestión y despliegue sigue planteando diversas dificultades, a menudo similares a las encontradas en 2020-2021.

A pesar de la existencia del Fondo de Apoyo Patriótico, algunos VDP siguen quejándose de retrasos en el pago de sus asignaciones. Los retrasos han causado cierta frustración, incluso desmoralización, aunque las donaciones recaudadas a nivel de distrito a veces compensan estos retrasos en los pagos. Algunos VDP denuncian también la falta de uniformes (sobre todo en el caso de los VDP locales) y de equipo de protección (espinilleras, por ejemplo). A menudo tienen que compartir un número limitado de armas automáticas individuales (AK47), a veces de calidad cuestionable. La falta de motocicletas y de combustible reduce su movilidad, lo que supone un obstáculo, ya que se espera que patrullen grandes zonas.

Estos problemas afectan especialmente a los VDP locales; algunos esperan ser transferidos a los VDP nacionales, que están mejor equipados, sin duda debido a su función ofensiva. Los VDP locales a veces expresan sus quejas en mensajes de audio o vídeo en las redes sociales. Estas expresiones públicas de descontento enfurecen a las autoridades militares, que las han prohibido.

Los VDP han sufrido importantes bajas en ataques yihadistas. Según las estadísticas del ACLED, al menos 644 VDP murieron en 148 atentados entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de octubre de 2023. El Centro-Norte, el Norte, el Centro-Este y el Este fueron las regiones más afectadas, con Boucle du Mouhoun no muy lejos.

Estas bajas aumentan el riesgo de desertiones, pero hasta ahora siguen siendo poco frecuentes. No se dispone de cifras exactas, pero fuentes de seguridad estiman que entre 400 y 600 VDP -alrededor del 1 al 2 por ciento de la fuerza total- han desertado individualmente o en pequeños grupos.

Además, estas bajas afectan a la cooperación entre los VDP y las fuerzas armadas. En 2021 y 2022, por ejemplo, los VDP acusaron al ejército de incumplir sus promesas, dejarlos expuestos en el frente o no acudir en su ayuda cuando eran atacados. Numerosos incidentes confirman estas acusaciones. En Bouroum (Namentenga, Centro-Norte), algunos VDP y una unidad del ejército, obligados a retirarse de la ciudad en 2022 debido a la inseguridad, intentaron regresar en mayo de 2023. Sin embargo, unos días más tarde, el ejército volvió a abandonar la ciudad, exponiendo a los VDP a un ataque en el que murieron 31 de ellos. Los VDP acusaron a las fuerzas armadas de abandonarlos en Partiaga (este) en marzo, en Zekeze, cerca de Bittou (centro-este), donde 23 civiles y VDP fueron asesinados el 18 de abril, y en Bourasso, donde 32 VDP de Nouna (Kossi, Boucle du Mouhoun) fueron asesinados el 27 de mayo.

En varias zonas, estos sucesos incitaron a los VDP y a una parte de la población a pedir la destitución de ciertos mandos militares y policiales. A principios de junio, la población local y los VDP exigieron la salida de varios dirigentes de Gourcy (norte), entre ellos el jefe de policía de la ciudad, después de que las fuerzas armadas se negaran a recuperar los cadáveres

de civiles asesinados por los yihadistas. Lo mismo ocurrió en Mané, donde los lugareños insistieron en que el comisario dimitiera tras un ataque yihadista a principios de 2023.

Las relaciones entre los gendarmes y los VDP son las más tensas, como puede verse en Kompienga, Nouna, Boulsa, Gorgadji y Arbinda. Es difícil determinar la causa de estas tensiones. Tras la destitución del presidente Damiba, los gendarmes se han mostrado menos activos en la lucha antiterrorista, lo que ha suscitado las críticas de los VDP. Las tensiones entre el presidente Traoré y la gendarmería también pueden desbordarse, ya que muchos de los VDP, generalmente comprometidos con la causa del presidente, sospechan que la gendarmería sigue siendo leal al antiguo régimen. A principios de julio de 2023, los VDP acusaron al comandante de la unidad de gendarmería de colaborar con los yihadistas en Boulsa. Este incidente se produjo tras una serie de tensiones en las que los VDP han acusado a la gendarmería de no ayudarles tras un ataque el 7 de julio en Kogsablogo (Boulsa) en el que murieron dieciséis VDP y la gendarmería no les prestó ninguna ayuda.

Las relaciones cotidianas entre los VDP y las fuerzas armadas están plagadas de malentendidos sobre sus respectivos papeles. Mientras que las fuerzas armadas, de acuerdo con los compromisos de Traoré, prohíben a los VDP patrullar por su cuenta, los VDP critican a los militares por ser demasiado temerosos o celosos para actuar. También acusan a varios oficiales de seguir siendo leales al antiguo régimen. Los VDP también se quejan de que ciertas unidades militares son condescendientes, se burlan e incluso desprecian la información de inteligencia que proporcionan.

Las bajas civiles, combinadas con la frustración por la falta de recursos y las difíciles relaciones con las fuerzas de defensa y seguridad, corren el riesgo de exacerbar el resentimiento entre los VDP. A largo plazo, este descontento podría provocar más desertiones que las registradas en 2023.

Hasta ahora, estas quejas se han dirigido menos a Traoré, que goza del apoyo de la mayoría de los VDP, y más a las unidades locales de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, si se permite que el descontento se agrave y se extienda, los elementos descontentos podrían acabar dirigiendo

sus críticas al jefe del Estado, como ocurrió con el expresidente Kaboré, a quien los VDP acusaron de abandonarlos.

Defender la nación a costa de la cohesión social



Los prejuicios comunitarios exacerbaban las divisiones

Los VDP parecen indispensables en la lucha antiyihadista, pero a menudo han sido acusados de exacerbar las tensiones sociales en las zonas donde operan. Uno de los críticos es el ex primer ministro Albert Ouédraogo (enero-septiembre de 2022), que declaró en una entrevista en agosto de 2022: "Estos grupos [los VDP] deben reflejar la diversidad de la comunidad a nivel de distrito. Porque hemos observado que se ha desarrollado una especie de faccionalismo comunitario dentro de los VDP. Y somos conscientes de que esto ha tenido algunos efectos negativos". Como ya se ha señalado, el presidente Damiba también se mostró crítico con los VDP: "a pesar de su valentía, a veces [son] manipulados para ajustar cuentas entre comunidades, [...] alterando los delicados equilibrios logrados por nuestros predecesores". Crisis Group también destacó este problema en un informe publicado en 2020.

El reclutamiento del VDP nunca ha respetado el equilibrio dentro de las comunidades locales y ha excluido casi sistemáticamente a los pastores. Los mossi -que representan el 50% de la población- son mayoría en los VDP a nivel nacional, lo que refleja la demografía del país. Sin embargo, los fulani -la segunda comunidad más numerosa de Burkina Faso, con cerca del 10%

de la población- no suelen ser reclutados. La discrepancia es especialmente marcada en las zonas donde son mayoría o están muy arraigados.

En las regiones del Sahel y del Centro-Norte, los koglwego están formados principalmente por mossi y fulsé, mientras que los fulani y los tuaregs están en gran medida excluidos, un desequilibrio que se acentuó cuando se establecieron los VDP en 2020. En las provincias de Oudalan y Seno, los VDP creados en 2021 están formados principalmente por songhai y gourmantché, con muy pocos fulani (la provincia de Yagha es una excepción). En la segunda oleada de VDP, el reclutamiento de nuevas comunidades (lobi, bisa) volvió a discriminar a los fulani, excepto en algunos casos, como en Kampti (suroeste).

Se excluye a los fulani principalmente porque los VDP los han acusado de formar la mayoría de los grupos yihadistas, lo que ha llevado a los grupos Koglwego y posteriores VDP a oponerse a su reclutamiento. Como consecuencia, en muchos bastiones del VDP, como Arbinda, Gorgadji o Djibo en el Sahel, Barsalogo en el Centro-Norte, Titao o Sollé en el Norte, se mantiene deliberadamente a los fulani fuera de los cuerpos auxiliares porque se sospecha que colaboran con los yihadistas.

Las autoridades nunca han tomado medidas para corregir estos prejuicios comunales. En 2017, varias personalidades fulani del Sahel quisieron organizarse en grupos de autodefensa, pero el presidente Kaboré se negó a apoyar la iniciativa. En 2022, el presidente Damiba expresó su deseo de reclutar a fulani en los VDP, pero fue en vano. Desde que asumió el poder, el presidente Traoré no ha hecho ninguna declaración pública sobre la cuestión, pero ha pedido a los grupos fulani que insten a sus "hermanos" de los grupos yihadistas a deponer las armas.

Tras años de exclusión y abusos a manos de los grupos koglwego y los VDP, muchos fulani han renunciado a la posibilidad de unirse a los VDP. Algunos líderes fulani explican que sus comunidades se mantienen alejadas de los VDP por miedo a ser estigmatizadas, aisladas o incluso amenazadas. Unirse a los VDP no bastaría para proteger a sus comunidades de estos grupos y, de hecho, las expondría a una violencia yihadista aún mayor, dirigida contra los VDP en particular. Esta reticencia a unirse a los VDP también suele convertir a los fulani en sospechosos a ojos de las

autoridades. A finales de 2022, se rechazó a solicitantes fulani alegando que podrían intentar infiltrarse en los VDP para apoyar a los yihadistas.

Esta falta de inclusividad se debe también a la aplicación incorrecta de la normativa. En teoría, la creación de los VDP está sujeta a la aprobación de las poblaciones locales a través de "asambleas generales presididas por el Comité de Desarrollo de la Aldea o el Consejo de Distrito". Este filtro local está diseñado para comprobar el carácter de los solicitantes y garantizar que todas las comunidades estén representadas en los VDP. Sin embargo, estas asambleas generales nunca se han celebrado, lo que indica que las autoridades no las consideran prioritarias. El papel del Consejo de Distrito ha sido cuestionado desde la disolución de las autoridades regionales y locales el 1 de febrero de 2022.

Sin embargo, incluso sin asambleas generales, los alcaldes, consejeros locales y líderes tradicionales, junto con los comandantes locales del ejército y la gendarmería, trabajaron juntos para reunir los VDP durante los dos regímenes presidenciales precedentes. Este mecanismo de consulta con personalidades locales ha desaparecido en gran medida desde la llegada del presidente Traoré. La falta de consulta es ciertamente comprensible a nivel de los VDP nacionales, ya que no son reclutados para servir en sus comunidades de origen. Sin embargo, crea problemas para los VDP locales, que prestan servicio en sus propias comunidades y necesitan ser aceptados por todas las figuras locales destacadas. En este caso, la Brigada de Vigilancia y Defensa de la Patria se encarga directamente del reclutamiento a partir de las solicitudes individuales presentadas a las autoridades regionales. La Brigada también interviene en ciertos casos con figuras locales de alto perfil que no representan la diversidad de la comunidad en una zona específica.

Los prejuicios comunitarios entre los VDP son evidentes por su implicación en la resolución de problemas locales no relacionados con las actividades de contrainsurgencia. Ganar poder político o controlar la economía local es una agenda oculta en la lucha contra el terrorismo. Dada la presión generalizada por el acceso a los recursos (tierra, agua, bosques, ganado) que ya no están bajo el control del Estado, los VDP se convierten

en una forma de "ajuste de cuentas", según el fundador del Koglweogo en la región Este.

Este fenómeno erosiona la cohesión social. En las regiones Centro-Norte, Norte, Gran Oeste (Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins, Suroeste) y en la provincia de Gourma de la región Este, las comunidades no mossis ven en los VDP (predominantemente mossis) un medio de reforzar la base moagha en las zonas periféricas donde son minoría. Recientemente, en las regiones del suroeste y Hauts-Bassins se han producido desalojos de tierras y asesinatos, que han enfrentado a los VDP mossi con los VDP de las comunidades indígenas bobo y lobi. En la provincia de Oudalan, las comunidades tuareg y fulani han acusado a los VDP de mayoría songhai de perseguir un programa comunitario, especialmente en Markoye.

En medio de esta competencia intercomunitaria, algunos grupos superaron su reticencia inicial a crear VDP, formando tales unidades para que las comunidades no indígenas (a menudo mossi) no se les adelantaran. Los Gourmantché de la región oriental y de la provincia de Seno (Sahel) son un ejemplo de ello, mientras que los Dozo del oeste de Burkina son otro.

La economía de guerra establecida por algunos grupos del VDP ha alimentado las divisiones intercomunales, sobre todo cuando esta economía se basa en el robo de ganado, un recurso de gran importancia económica y cultural. El ganado suele ser propiedad de las comunidades nómadas, pero codiciado por los yihadistas. En ocasiones, los VDP también han robado y escondido ganado, trabajando en colaboración con miembros de las fuerzas armadas y alcaldes. A este respecto, el alcalde de Kelbo (provincia de Soum) ha sido objeto de una investigación pública por parte del Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, o CISC, una organización para promover la cohesión social entre las comunidades de Burkina, pero su implicación aún no ha sido establecida legalmente. Estas prácticas delictivas no sólo debilitan a los poderes públicos, sino que también crean fuertes tensiones a nivel comunitario, sobre todo porque a menudo quedan impunes. El robo de ganado ha disminuido en 2022, principalmente porque hay menos animales que robar ahora que el número de cabezas de ganado se ha visto diezmando por los robos, pero sigue produciéndose.

Los VDP en el centro de la violencia comunal



Los fulani se mantienen alejados de los VDP porque son especialmente vulnerables a la violencia que estos grupos cometen junto con las fuerzas armadas, como demuestran varios incidentes recientes de violencia contra esta comunidad.

Pocos meses después de la creación de los VDP, en enero de 2020, el jeque de la ciudad de Tanwalbougou (región Este) aconsejó a sus seguidores que se mantuvieran neutrales. Siguiendo esta orientación, los fulani de Tanwalbougou se negaron a unirse ni a los VDP ni a los yihadistas. En Nouna (Boucle du Mouhoun), varias organizaciones de derechos humanos acusaron a los VDP de matar a más de 100 fulaníes el 30 de diciembre de 2022.

En Ouahigouya (Norte), al menos 30 fulaníes fueron secuestrados entre noviembre de 2022 y principios de marzo de 2023. Están desaparecidos desde entonces.¹⁰⁵ Entre abril y junio de 2023, en las regiones de Hauts-Bassins y Centro-Este, individuos armados dispararon sumariamente a fulani que pastoreaban ganado o viajaban en autobús. Algunos observadores han culpado a los VDP.

Los ataques contra civiles no sólo están relacionados con la identidad étnica. Los VDP y las fuerzas armadas han atacado a hombres y mujeres sospechosos de hacer negocios o tener vínculos personales con yihadistas. En la provincia de Bam (centro-norte), en el verano de 2022, las fuerzas armadas y los VDP atacaron violentamente a civiles de diversos orígenes cuyas ocupaciones (como carniceros o vendedores de combustible) podrían haberles permitido proporcionar apoyo logístico a los yihadistas. En agosto de 2023, surgieron sospechas similares en relación con las víctimas de la masacre de Tougouri (centro-norte).

El lugar de residencia, sobre todo cuando se encuentra cerca de zonas yihadistas, puede ser otra explicación de estas represalias. En marzo de 2023, los residentes de Karma (Norte) denunciaron que las fuerzas armadas habían matado al menos a 146 civiles no fulani (incluidos mujeres y niños) al estilo de una ejecución, una acusación que aún está por confirmar. De confirmarse estas acusaciones, podrían reflejar una estrategia de las fuerzas armadas para atacar a los civiles que viven cerca de zonas bajo influencia yihadista y que no están dispuestos a adoptar una postura clara en el conflicto, en apoyo del ejército y de los VDP.

Las experiencias personales de los nuevos reclutas de los VDP también explican en parte la propagación de la violencia. A menudo, estos individuos han sufrido en carne propia los ataques yihadistas, perdiendo a familiares o amigos cercanos, o siendo desplazados de sus hogares, lo que les ha dejado profundos resentimientos.

Las penas han aumentado significativamente en los últimos meses, a pesar de que los VDP nunca han sido castigados por los actos de violencia masiva en los que supuestamente han participado. Más de un centenar de VDP han comparecido ante las autoridades para enfrentarse a medidas disciplinarias que van desde el despido a penas de prisión. Algunos han ido a la cárcel por robo, venta de su equipo, violación y homicidio. En 2023, cinco VDP fueron encarcelados en Ouahigouya por matar a un anciano.

Los castigos son a menudo el resultado de la influencia ejercida por los familiares de las víctimas o de una actitud proactiva de los agentes de seguridad de la zona. Sin embargo, todavía no se ha llevado ante la justicia a ningún responsable de las masacres. Las investigaciones están en curso,

pero no se ha avanzado. Los sistemas establecidos para que los "beneficiarios" (poblaciones locales) controlen las actividades de los VDP, tal y como se decretó en junio de 2022, nunca se han puesto en práctica.

El hecho de que los VDP operen ahora junto a las fuerzas armadas no mejora su trato a los civiles. Las fuerzas armadas llevan mucho tiempo siendo acusadas de atacar a civiles de los que sospechan que colaboran con los yihadistas. Tales acusaciones, a menudo fundadas, circulaban incluso antes de que los VDP se convirtieran en un elemento central de las operaciones de contrainsurgencia. Según la base de datos ACLED, las fuerzas armadas mataron al menos a 500 civiles entre enero de 2019 y abril de 2020. Las organizaciones de derechos humanos siguen acusándolas con frecuencia de abusos y masacres, incluido el caso ya mencionado de Karma en marzo de 2023 y la masacre de Zaongo (Centro-Norte) el 6 de noviembre de 2023.

Estos actos de violencia dan lugar a represalias que contribuyen a atraer nuevos reclutas a los VDP, pero también a los grupos yihadistas. Cada masacre socava la cohesión social y perpetúa un ciclo de venganza entre grupos armados rivales. Sin mediación local, estos conflictos intercomunales no harán más que empeorar.

Civiles asociados a los VDP y altamente vulnerables a la violencia yihadista

El presidente Traoré ha invocado el patriotismo en sus llamamientos a la población burkinesa para que apoye la campaña militar de recuperación de territorio. La retórica ha sido divisiva, y los críticos de su enfoque -e incluso los que prefieren no tomar postura- han sido acusados de ser "apátridas" carentes de lealtad a su país.

Cuando se les pide que tomen partido, las comunidades ya no pueden permanecer neutrales en la guerra contra el terrorismo. Antes, podían oponerse a la creación de unidades de VDP para protegerse de posibles represalias yihadistas. Ya no pueden hacerlo. Quienes sigan siendo

reticentes a la creación de VDP corren el riesgo de ser considerados enemigos de la nación y sufrir represalias. El 6 de noviembre de 2023, al menos 70 civiles (entre ellos mujeres y niños) fueron masacrados en la aldea de Zaongo (Centro-Norte) después de que se negaran a crear unidades de VDP para evitar tener que huir de sus hogares, como había ocurrido en las aldeas vecinas. En más de una ocasión, las autoridades han detenido a un líder tradicional que se oponía a la creación de grupos de VDP en Djibo (Soum). El 1 de abril de 2023, las autoridades detuvieron al fundador de los Koglweogo, que se oponía a los VDP y posteriormente fue dado por desaparecido en Fada N'Gourma (Gourma). Aun así, en ocasiones las comunidades siguen oponiéndose a la creación de VDP.

Las comunidades ya no pueden negociar acuerdos locales con los yihadistas como antes. En Pobé Mengao (Soum), Thiou (Yatenga) y Titao (Loroum), donde estos diálogos desembocaron en acuerdos locales en 2021, los yihadistas consiguieron negociar la desmovilización de los VDP. Estos acuerdos locales beneficiaron sin duda a los yihadistas al inclinar la balanza de poder a su favor. Pero también proporcionaron seguridad a la población local, permitiéndoles salir de sus ciudades para realizar trabajos agrícolas a condición de que respetaran la sharia y no colaboraran con las fuerzas armadas. El régimen actual ha puesto fin a estos diálogos locales, que el ex ministro de Reconciliación y Cohesión Social durante la presidencia de Damiba había apoyado e incluso ampliado a otras regiones. Algunos participantes en estos diálogos han sido detenidos desde entonces, mientras que otros siguen en busca y captura, lo que hace prácticamente imposible iniciar nuevas rondas de conversaciones, con la excepción de una iniciativa provisional a principios de octubre de 2023 en la provincia de Yagha.

Las comunidades están pagando un alto precio por su incapacidad para mantenerse neutrales o entablar un diálogo con los yihadistas. Desde 2015, el número de civiles asesinados no ha dejado de aumentar hasta alcanzar niveles récord, lo que ha incrementado aún más el resentimiento y la sed de venganza. Según los datos de ACLED, al menos 1.527 civiles fueron asesinados durante los siete primeros meses de 2023, frente a los 1.414 civiles de 2022 y los 757 de 2021.

La violencia contra los civiles ha evolucionado significativamente: antes de la llegada al poder del presidente Traoré, las fuerzas armadas, los VDP y el IS Sahel mataban a más civiles que el JNIM. El JNIM rara vez atacaba a civiles a gran escala. En las zonas sin VDP, los JNIM atacaron principalmente a las fuerzas armadas y a los símbolos de la presencia del Estado (alcaldías, escuelas) y a sus representantes (funcionarios públicos, políticos electos). En las zonas en las que se habían reunido unidades de los VDP, el JNIM fue responsable de masacres, pero sólo en contadas ocasiones -como en Kodyel (Komondjari) en mayo de 2021 y en Solhan (Yagha) un mes después- y los altos mandos del grupo no habían autorizado estos actos.

El IS Sahel, por su parte, ya utilizaba sistemáticamente esta táctica, lanzando múltiples ataques contra civiles. El ejemplo más extremo fue Seytenga, que el grupo atacó dos veces, en junio de 2022 y en abril de 2023.

En 2023, la mayoría de los civiles fueron asesinados por los yihadistas, sobre todo por el JNIM. Tras el reclutamiento de la segunda oleada de VDP, los yihadistas empezaron a atacar a los civiles de forma más sistemática, aunque la violencia yihadista contra los civiles ya estaba aumentando ligeramente durante la presidencia de Damiba. El JNIM secuestra y asesina principalmente a personas relacionadas con los VDP, ya sea por sus relaciones familiares o por su implicación en el reclutamiento o el apoyo a los VDP. El grupo ha reivindicado la autoría de esta estrategia. Poco después de anunciar el reclutamiento de 50.000 VDP, por ejemplo, el JNIM produjo un vídeo en el que amenazaba a los civiles que ayudaran a las autoridades burkinesas en sus operaciones antiterroristas.

Las poblaciones civiles también se llevan la peor parte del creciente número de bloqueos del JNIM. Salvo raras excepciones, como en Djibo en 2020, las zonas bajo asedio parcial o total son aquellas en las que se han reunido los VDP. Además de perjudicar económicamente a los civiles, estos bloqueos también generan inseguridad. Cuando se prohíbe a los comerciantes entrar en los pueblos, la población local sufre una grave inseguridad alimentaria. Cuando las personas se aventuran a salir en busca de agua, leña o alimentos, son regularmente secuestradas o asesinadas, a veces con artefactos explosivos improvisados. Las mujeres suelen ser las víctimas.

En sus esfuerzos por proporcionar seguridad, las autoridades no han logrado resolver hasta ahora el dilema de cómo recuperar las tierras sin poner en peligro a la población. El Estado, a través de los VDP, parece estar arrastrando a las comunidades a la guerra, con el riesgo de hacerlas más vulnerables, tanto en términos de seguridad como de bienestar económico.

Margen de maniobra limitado para los socios extranjeros



Los socios tradicionales se encuentran en una posición delicada en Burkina Faso. Son muy conscientes de los riesgos de armar masivamente a los civiles y, por lo tanto, son reacios a aceptar las peticiones de las autoridades de armar a los VDP. Tampoco desean abandonar toda cooperación en materia de seguridad, no sólo porque han invertido mucho en seguridad en los últimos años, sino también porque temen que Burkina Faso pueda volverse hacia Rusia u otros nuevos socios.

La cautela de los socios tradicionales ante la cuestión del armamento de la población civil

Incluso antes de que surgiera la amenaza yihadista, los socios occidentales estaban interesados en las cuestiones de seguridad en Burkina Faso, especialmente en la policía de proximidad. Desde 2003, Uagadugú ha desarrollado una ambiciosa política en este ámbito. En 2010, publicó una estrategia de seguridad nacional que pretendía ampliar la policía de proximidad a todo el país. Varios donantes, entre ellos Canadá y la ONG suiza Coginta, respaldaron este enfoque desde el principio.

Sin embargo, las autoridades no supervisaron el progreso de estas iniciativas sobre el terreno. Sin embargo, las autoridades no supervisaron el progreso de estas iniciativas sobre el terreno, que se vinieron abajo y los ciudadanos decidieron tomar cartas en el asunto creando el Koglweogo. En 2016, las autoridades respondieron aprobando un decreto para formalizar el papel del Koglweogo dentro de las Estructuras Locales de Seguridad Comunitaria bajo la autoridad de los alcaldes. Dinamarca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoyaron especialmente a las autoridades en la aplicación de este decreto.

La aparición de la amenaza yihadista después de 2015 llevó a muchos actores internacionales a aumentar sus inversiones en seguridad y defensa. Aunque sus esfuerzos se centraron en la lucha antiterrorista y la contrainsurgencia, no renunciaron a la cuestión de la seguridad local.

Sin embargo, se produjo un cambio significativo con la creación de los VDP en 2020. El entusiasmo de la mayoría de los socios occidentales decayó, ya que se esforzaron por posicionarse en relación con la nueva confianza de los líderes burkineses en los VDP. Algunos socios se niegan por principio a apoyar el armamento de civiles, mientras que otros temen los riesgos que conlleva una mayor dependencia de estos voluntarios para las operaciones de contrainsurgencia. En gran medida, están convencidos de que el reclutamiento de decenas de miles de VDP debilitará el tejido social de Burkina Faso e intensificará la violencia intercomunitaria. Para mitigar este riesgo, la Unión Europea ha intentado apoyar el diálogo entre los VDP y las comunidades en varias regiones. También ha intentado apoyar formas

locales de "coproducción" de seguridad entre las comunidades y el Estado que sean más inclusivas que los VDP.

Además, la UE ha expresado su preocupación por las repercusiones de estas decisiones en la cohesión militar. Un diplomático europeo señaló: "Teniendo en cuenta su número, los VDP se están convirtiendo en el núcleo del aparato de seguridad y el ejército regular en sus márgenes". A pesar de estas preocupaciones, los socios occidentales tienen pocos o ningún medio de influir en el pensamiento de las autoridades.

Aunque los socios de Burkina se muestran reticentes a apoyar a los VDP, los dirigentes del país esperan que contribuyan a la expansión de estos grupos civiles armados. Desde los golpes de Estado de enero y septiembre de 2022, las autoridades burkinesas han adaptado sus peticiones de "apoyo bélico" para solicitar equipamiento militar tanto para las fuerzas armadas como para los VDP. Sin embargo, para las entidades y países que, como la UE, se niegan por principio a armar a civiles, es imposible satisfacer tales peticiones. A los líderes de Burkina les resulta difícil aceptar esta postura de principios, habiendo designado a los VDP como un "cuerpo auxiliar" oficial bajo la autoridad de los ministerios de Defensa y Seguridad.

Ayudar a las nuevas autoridades sin apoyar a los VDP: Un dilema para los socios occidentales

En medio de las preocupaciones en torno a los VDP, las actitudes de los socios occidentales hacia las autoridades burkinesas también han cambiado tras los dos golpes de Estado de 2022. Estos acontecimientos complicaron sustancialmente la colaboración en materia de seguridad para varios Estados e instituciones multilaterales. Muchos han suspendido su cooperación o se muestran reacios a considerar nuevos proyectos que sustituyan a los que están a punto de concluir.

Francia, que antes era un socio privilegiado de Burkina Faso, se encuentra completamente marginada, sin ningún papel en la cooperación en materia de seguridad. Ya no tiene embajador en Uagadugú, ni agregado militar, después de que este último fuera expulsado en septiembre de 2023. Los 400 soldados franceses de la Operación Sable hicieron las maletas en

febrero de 2022, dando por concluida su presencia de quince años en el país. Esta ruptura entre las autoridades francesas y burkinesas se extiende más allá de la cooperación en materia de seguridad. Se han suspendido importantes medios de comunicación franceses, como Radio France Internationale, y entre agosto y diciembre de 2023, Francia no expidió visados a ciudadanos de Burkina Faso.

Las perspectivas de mejora de las relaciones entre ambas naciones en los próximos meses parecen poco halagüeñas. La desconfianza hacia París sirve de forraje político a las actuales autoridades, que aglutinan a sus bases con la idea de una segunda declaración de independencia que marque una ruptura definitiva con la antigua potencia colonial.

Por su parte, Estados Unidos suspendió su cooperación militar con Burkina Faso tras el primer golpe, en enero de 2022. Sin embargo, Estados Unidos tardó casi tres semanas en calificar de golpe de Estado el derrocamiento del presidente Kaboré el 24 de enero. Hasta el 18 de febrero de 2022, el Departamento de Estado no cortó la mayor parte de su ayuda a Burkina Faso debido a una ley que exige suspender la asistencia a una nación cuando su jefe de gobierno electo ha sido derrocado por los militares. La ayuda estadounidense a Burkina Faso es ahora mínima.

La reanudación de la ayuda estadounidense, incluida la militar, depende del restablecimiento del orden constitucional, que depende de la celebración de unas elecciones futuras muy inciertas. Los dirigentes burkineses han declarado en repetidas ocasiones que la organización de unas elecciones presidenciales requiere una mejora significativa de la seguridad. Sin embargo, Estados Unidos no ha vacilado entre el pragmatismo y los principios en Burkina Faso, como ha hecho en Níger desde el golpe de Estado del 26 de julio de 2023 en ese país. No obstante, se mantiene diplomáticamente activo, especialmente a través del embajador, que se ha reunido regularmente con los actuales dirigentes.

Tras el golpe de enero de 2022, la UE interrumpió su cooperación en materia de seguridad, en particular su apoyo a la gendarmería, aunque mantuvo todos los proyectos iniciados antes del primer golpe. La postura de la UE sigue siendo la misma a día de hoy. Sin embargo, rápidamente se reanudaron las conversaciones entre la UE y Uagadugú para relanzar la

cooperación en materia de seguridad. El acuerdo entre el gobierno de transición de Burkina Faso y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) sobre un calendario electoral de 24 meses y la vuelta al gobierno civil antes del 1 de julio de 2022 justificaba en gran medida esta postura. La UE no quería sabotear los recientes esfuerzos para proteger al país de la expansión yihadista, ya que ello también entrañaría riesgos para el resto de la región e incluso para la propia UE.

El segundo golpe de Estado de septiembre de 2022 desbarató la perspectiva de reanudar la cooperación en materia de seguridad con Burkina Faso. Dos meses más tarde, el nuevo régimen envió una carta a la delegación de la UE solicitando apoyo armamentístico, en concreto armas automáticas y helicópteros. A pesar del difícil estado de la colaboración en materia de seguridad, la UE decidió no rechazar de plano esta petición. En su lugar, envió una misión interdepartamental a Uagadugú a finales de febrero de 2023, proponiendo la cooperación en materia de seguridad a través del Fondo Europeo para la Paz. Pero el apoyo del presidente Traoré a los golpistas de Níger el 26 de julio de 2023 paralizó estas conversaciones.

Mientras los socios occidentales dudan, reducen o suspenden su cooperación con las nuevas autoridades, éstas recurren cada vez más a Rusia. En la cumbre Rusia-África de julio de 2023, el presidente Traoré realizó un notable acercamiento a Moscú, llegando incluso a declarar su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania. El 31 de agosto de 2023, el viceministro ruso de Defensa realizó una visita oficial a Uagadugú, concluyendo un acercamiento en varios ámbitos estratégicos, incluida la cooperación militar. A principios de noviembre de 2023, el ministro de Defensa de Burkina Faso, Kassoum Coulibaly, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso. No mucho después, se informó de la llegada de instructores rusos a la capital burkinesa, aparentemente para apoyar el esfuerzo bélico de las autoridades, pero quizás también para servir como destacamento de seguridad de los altos mandos. Rusia podría decidir suministrar armas a las fuerzas armadas burkinesas, una medida que también podría beneficiar a los VDP.

Los socios occidentales siguen estos acontecimientos con preocupación. Son reacios a respaldar las actuales estrategias de seguridad

del régimen, especialmente en lo que respecta a los VDP. Pero también se muestran reticentes a romper bruscamente sus lazos, a riesgo de perder inversiones pasadas y ser sustituidos por competidores. En consecuencia, los socios occidentales se enfrentan a un dilema que, hasta el momento, son incapaces de resolver.

Frenar los efectos contraproducentes de los VDP

Ya en 2020, Crisis Group anticipó que la creación de los VDP exacerbaría la violencia e incitaría a los ataques yihadistas. El uso de los VDP es, sin duda, una de las principales causas del alarmante aumento de la violencia contra civiles desde 2020. Pero a estas alturas, las autoridades han apostado demasiado por estas unidades de voluntarios como para dar marcha atrás. La escasez de efectivos del ejército no le deja otra opción que recurrir a los VDP para proteger el territorio. Para limitar los daños causados por el uso de los VDP, las autoridades de transición podrían inspirarse en las medidas que se exponen a continuación.

A corto plazo, podrían, en primer lugar, reducir el ritmo de reclutamiento, integrar en el ejército a más VDP bien formados y mejorar los mecanismos de control para proteger mejor a la población civil. A largo plazo, también podrían estudiar la mejor manera de desmovilizar a los demás reclutas. Al mismo tiempo, las autoridades deberían reevaluar su despliegue de las fuerzas armadas regulares (incluidas las fuerzas de seguridad interna), que siguen siendo el mejor instrumento para que un Estado asegure su territorio. Por último, deberían reforzar los controles sobre los VDP para frenar los abusos que socavan tanto la cohesión social como la estabilidad del país.

Encontrar el equilibrio adecuado en materia de seguridad

El reclutamiento masivo de VDP, que podría casi duplicar el número de efectivos de las fuerzas de defensa y seguridad, supone una amenaza

para la cohesión militar y la estabilidad nacional. Las autoridades deberían reducir el reclutamiento y reconsiderar su objetivo de movilizar a 100.000 VDP, tal y como anunció el primer ministro en mayo de 2023. Perseguir este objetivo parece poco aconsejable teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, las tensiones locales entre las tropas del ejército y los VDP, y los efectos negativos de esas tensiones sobre la cohesión social. Para compensar el descenso del reclutamiento de VDP sin comprometer la seguridad nacional, las autoridades deberían hacer un mejor uso de las fuerzas armadas existentes. Estos efectivos, ya contabilizados en el presupuesto del Estado, no generan ningún gasto adicional.

Además, la gendarmería y la policía siguen estando demasiado alejadas de la lucha contra los grupos yihadistas, a pesar de la supuesta movilización de todas las fuerzas de defensa y seguridad. De 2015 a 2019, la gendarmería demostró que podía desempeñar un papel clave en la lucha contra la insurgencia, a pesar de enfrentarse a acusaciones de violaciones de los derechos humanos, lo que desencadenó nuevos ataques yihadistas. Pero la falta de confianza entre los dirigentes y la gendarmería inhibe el pleno uso de esta fuerza, destinada a tener un contacto más estrecho con la población. También en este caso, un diálogo más abierto con la gendarmería ayudaría a mejorar las cosas. Además, las autoridades deberían proseguir los esfuerzos de contrainsurgencia lanzados a principios de 2023 para movilizar a la policía aumentando el número de unidades GUMI. Esta fuerza de élite, compuesta por unos 20.000 individuos, debería utilizarse mejor en el conflicto.

Al mismo tiempo, las autoridades deberían seguir integrando a los GUMI mejor entrenados en el ejército, que tiene previsto alistar a un gran número de efectivos en los próximos años. Este enfoque ayudaría a mejorar la formación y la supervisión de los VDP, siempre que implique una investigación rigurosa. La comprobación de antecedentes es esencial para evitar el reclutamiento de individuos implicados en delitos graves como ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual.

Una vez integrados en el ejército, el despliegue de los VDP en todo el país podría mitigar su implicación en los conflictos locales entre comunidades, que a menudo sustentan gran parte de la violencia contra los

civiles. Sin embargo, este reclutamiento no es la panacea, ya que el propio ejército es acusado de violencia contra los civiles. Por tanto, los efectos positivos de dicha integración dependen en gran medida de que las fuerzas armadas cambien su enfoque para proteger mejor a los civiles, especialmente a los que viven cerca de las zonas donde actúan los yihadistas.

La integración de más VDP respondería a la necesidad de aumentar la plantilla del ejército, al tiempo que se reclutaría a personal con experiencia en el campo de batalla. También permitiría al Estado reducir el número de VDP, aliviando las tensiones entre estas tropas auxiliares y las fuerzas armadas. Sin embargo, una vez que los VDP son desplegados como tropas del ejército fuera de su región de origen, pierden gran parte de la ventaja que aportan en cuanto a conocimiento del terreno. Al ser significativamente más costosos, también supondrán una mayor carga para el presupuesto estatal, ya de por sí sobrecargado por el gasto en seguridad.

Algunos de estos contingentes podrían integrarse en el ejército con contratos de duración determinada renovables, para que el país no acabe con un exceso de personal militar si la situación de seguridad mejora dentro de cinco o diez años. Al mismo tiempo, las autoridades podrían empezar a estudiar formas de reciclar y reorientar al personal contratado del ejército al final de su empleo. Otra solución sería transformar los VDP en Estructuras Locales de Seguridad Comunitaria. Bajo la supervisión de la policía o la gendarmería, estas unidades policiales comunitarias "proporcionan una presencia de seguridad, recopilan información y pueden detener a personas en casos de infracción evidente", según el decreto de 2016. Sus miembros no van armados, salvo las personas que tienen permiso de armas.

Las autoridades también deberían animar a diferentes entidades a alistar a los VDP, como la gendarmería (a pesar de las tensiones actuales y dado el nombramiento de un nuevo jefe de gendarmería), la policía o incluso los servicios de aguas y forestales, adaptando el reclutamiento a las necesidades de cada cuerpo. Los VDP locales, por ejemplo, podrían incorporarse a fuerzas policiales que operan principalmente en zonas urbanas y no participan directamente en la lucha contra el yihadismo, a excepción de sus unidades de élite GUMI. Para resolver la crisis actual, las

iniciativas locales de seguridad tipo Koglweogo o los auxiliares de policía, que han demostrado su valía en la lucha contra la delincuencia, podrían resultar actores clave. Es posible que sean necesarios para combatir las facciones yihadistas persistentes, cuyos miembros a menudo se dedican al bandidaje, beneficiándose de la distribución generalizada de armamento de grado militar o de armas de fuego más pequeñas.

Evitar que los VDP socaven la cohesión social

Los VDP, al igual que las fuerzas armadas, se enfrentan a acusaciones persistentes de perpetrar actos de violencia contra civiles. Hasta la fecha, las investigaciones y los procesamientos han sido insuficientes. Las autoridades no deben tolerar estos crímenes. Ganar la guerra a los yihadistas no puede hacerse a costa de la población. Deben reconocer que todo acto de violencia contra civiles hace el juego a los grupos yihadistas.

Se necesitan acciones inmediatas y tangibles para tranquilizar a la población que se siente objetivo de los VDP y del régimen. En concreto, el fiscal militar debe iniciar investigaciones sobre las masacres de civiles en las que presuntamente estén implicados los VDP y el ejército, como el incidente de Nouna del 31 de diciembre de 2022, y proceder a detenciones y acusaciones cuando esté justificado. Tales acciones enviarían una señal clara a los posibles autores sobre la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, las mujeres y los hombres víctimas de la violencia obtendrían una mayor sensación de apoyo por parte de las autoridades.

Como mínimo, los dirigentes burkineses deberían reforzar los mecanismos de supervisión de las acciones de los VDP. En primer lugar, deben establecer mecanismos de supervisión basados en la comunidad, como se indica en el decreto de junio de 2022. Estos mecanismos deben incluir sistemáticamente personal de organizaciones de derechos humanos o personas que trabajen localmente en este ámbito, junto con otros representantes locales, para garantizar la imparcialidad.

Las autoridades también deben velar por que la contratación no socave la cohesión social. Para ello, los representantes de la comunidad, que forman parte de las "asambleas de aldea", deberían aprobar a los reclutas

de la VDP para que cuenten con el apoyo de las personas a las que se supone que deben proteger. Las futuras campañas de reclutamiento deberían exigir un nivel mínimo de equilibrio étnico, en particular garantizando que los candidatos fulani sean considerados en pie de igualdad con los demás. Aunque los fulani son cada vez más reacios a unirse a los VDP, todavía hay candidatos potenciales entre ellos.

Las autoridades también deberían trabajar para frenar la violencia étnica y reanudar los contactos con las comunidades excluidas de los VDP o que se niegan a unirse a ellos, en particular los fulani. Podrían promover la creación de foros de diálogo locales inclusivos que representen a todas las comunidades. Lo ideal sería que los propios participantes procedieran de estas comunidades para garantizar la credibilidad de los foros. Las organizaciones de derechos humanos reconocidas a nivel nacional, como el *Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples*, el *Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés* y *Tabital Pulaku*, deberían formar parte sistemáticamente de estos comités para garantizar su representatividad.

Como medio para reconstruir los lazos sociales, también debería invitarse a los fulani desplazados a participar en iniciativas comunitarias en las que intervengan las fuerzas armadas y los VDP. Una de estas iniciativas es "Production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire" (Producción para defender la patria de la inseguridad alimentaria), un programa que pretende movilizar a las fuerzas armadas y a los VDP para asegurar la producción agrícola.

Un enfoque preventivo será crucial para preservar la cohesión social en las zonas donde los grupos yihadistas son menos activos, como ciertas provincias de las regiones Centro-Oeste, Centro-Sur y Sur-Oeste, así como la región Meseta-Centro. En estas zonas, las autoridades deberían hacer respetar el principio de "aprobación por la población local", estipulado como condición previa para reunir los VDP por la ley de diciembre de 2022. Podrían crear "asambleas de aldea", previstas en el decreto de junio de 2022, que se encargarían de decidir si aprueban los VDP. Si una asamblea decide no hacerlo, las autoridades deberían respetar esta elección en aras de la cohesión social, dado que la violencia yihadista aún no ha afectado a

estas zonas. Si una asamblea aprueba una unidad de VDP, pero ciertas comunidades (por ejemplo, los fulani) se niegan a unirse, las autoridades deberían asegurarse de que los VDP comprenden y respetan esa elección para no estigmatizar a las comunidades afectadas.

Identificar un área de cooperación para los socios internacionales

Burkina Faso tiene una larga tradición de colaboración con socios extranjeros, tanto regionales como internacionales. Comparten un interés común por evitar una mayor escalada de la violencia y la inseguridad, pero tienen ideas diferentes sobre los factores que contribuyen a esta situación. Los socios extranjeros, especialmente los occidentales, deberían intensificar su cooperación para defender sus posturas compartidas, basadas en la preocupación de que el uso continuado de los VDP y la violencia recurrente contra la población civil agraven la inseguridad en lugar de resolverla.

Los socios occidentales, incluida la UE, que deseen preservar las relaciones con Uagadugú deberían mostrar su voluntad de reforzar los controles internos y externos sobre los VDP, sin armarlos. Es posible que los dirigentes burkineses no abandonen sus anteriores peticiones de armas. No obstante, los socios del país deberían seguir ayudando a coordinar y supervisar las actividades de los VDP, con la esperanza de que las autoridades lleguen a reconocer su importancia.

En términos de cohesión social, los socios extranjeros, y en particular la UE, podrían promover mecanismos para controlar mejor las acciones de los VDP sin proporcionar apoyo operativo. Estos mecanismos serán esenciales para ayudar a reducir los abusos de los VDP contra la población civil. Los socios del país podrían proponer a las autoridades burkinesas que ayuden a establecer y gestionar asambleas de aldea y mecanismos de control civil, ambos previstos por la ley. Con la aprobación de los órganos gubernamentales burkineses, la UE también podría desempeñar un papel apoyando iniciativas para reintegrar a los desplazados internos en la vida civil.

En cualquier caso, los socios deberían intensificar el apoyo a las organizaciones de derechos humanos para que sus actividades puedan

abarcar todos los distritos en los que operan los VDP. Estas organizaciones han desempeñado un papel vital en los últimos meses al pedir a las autoridades locales que actuaran en cuanto desaparecieran civiles o se enfrentaran a la violencia. Sin embargo, los socios deben tener cuidado de no poner a estas organizaciones en peligro, dado el actual recorte de libertades en todo el país.

La postura cada vez más dura del régimen está llevando a muchos socios a reducir la cooperación al mínimo, sobre todo en el ámbito de la seguridad. La UE se muestra especialmente recelosa, aunque algunos Estados miembros también temen que una menor cooperación pueda beneficiar a Rusia, percibida como un serio rival desde que demostró su interés por el Sahel en la cumbre Rusia-África de julio de 2023. Más allá de las rivalidades geopolíticas, el verdadero peligro para la región y sus socios reside en el posible colapso del país, que repercutiría en sus vecinos, especialmente en los Estados costeros del sur. Ciertamente, la cooperación en materia de seguridad no puede darse a cualquier precio, y las posibilidades se han reducido considerablemente debido al arma de doble filo que supone el empleo de los VDP. No obstante, el diálogo y la búsqueda de un compromiso deben primar sobre la ruptura de alianzas o el aislamiento de Burkina Faso.

Por último, los socios internacionales deberían coordinar mejor su enfoque hacia las autoridades burkinesas, en particular aunando esfuerzos para fomentar un mayor control e investigaciones independientes cuando los VDP o las fuerzas armadas sean acusados de delitos. Estados Unidos, que todavía ejerce un peso político significativo y no tiene un pasado colonial en la región, podría encabezar una coalición de socios de este tipo para responder de forma más asertiva, con el objetivo de frenar la violencia y arrojar más luz sobre los presuntos abusos de los PVDP en el país.

Conclusión

Los VDP se han convertido en un pilar de la lucha antiyihadista en Burkina Faso. Sin embargo, plantean importantes riesgos para el país. El reclutamiento anunciado de un gran número de nuevos VDP -entre 50.000 y 100.000- hará cada vez más difícil controlar a estos grupos. Muchos les acusan de estar implicados en numerosos crímenes contra civiles.

Dar marcha atrás no es una posibilidad a corto plazo. Dado el arraigo de los VDP en el aparato de seguridad, dismantelar rápidamente las unidades es poco realista y potencialmente peligroso. Sin ellas, las localidades bajo bloqueo, junto con muchas otras, no resistirían durante mucho tiempo los ataques yihadistas.

Sin embargo, para que las VDP contribuyan positivamente a los esfuerzos de contrainsurgencia, Uagadugú debe tomar medidas para controlarlas mejor y mejorar la protección de los civiles durante sus operaciones. Es posible que las autoridades burkinesas se enfrenten a riesgos al hacerlo, ya que el cuerpo auxiliar proporciona un importante apoyo al régimen, pero ése es el precio que hay que pagar para estabilizar el país.